



AMPARO DIRECTO: DT. 780/2024

QUEJOSA: *****

TERCERO **INTERESADO:**

** *****
***** ** *****

PONENTE: MAGISTRADO JOSÉ ANTONIO ABEL AGUILAR SÁNCHEZ.

SECRETARIA: JOCELINE HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ.
JHR/LEVP

Toluca, Estado de México, sentencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, correspondiente a la sesión remota¹ celebrada el ocho de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo directo número **DT. 780/2024**; y,

RESULTANDO:

PRIMERO

Demanda de amparo Presentada el trece de mayo de dos mil veinticuatro.

¹ La resolución de este asunto se llevará a cabo de manera remota, de conformidad con el artículo 30 fracción V tercer párrafo del Acuerdo General 6/2026 del Pleno del Órgano de Administración Judicial, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Órgano.

Acto reclamado y Laudo de veintitrés de abril de dos mil veinticuatro, dictado por el **Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México**, en el expediente laboral *****.

Informe con justificación Rindió el informe y adjuntó la demanda de amparo original, así como las constancias del juicio de origen y la constancia de emplazamiento a la parte tercera interesada.²

Admisión de la demanda Acuerdo de **veintidós de mayo de dos mil veinticuatro.**³

Se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación.

Amparo adhesivo y formulación alegatos	No se promovió amparo adhesivo ni se formularon alegatos; el Ministerio Público no formuló pedimento.
---	---

Turno a ponencia Proveído de **veinte de junio de dos**

³ Artículo 181 de la Ley de Amparo.



mil veinticuatro.

SÉPTIMO

Auto de nueva integración Acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil veinticinco, por el que se hizo del conocimiento a las partes que este órgano colegiado está integrado por la Magistrada Presidenta **Paola Lizzette Acosta Campos**, el Magistrado **José Antonio Abel Aguilar Sánchez** y la Magistrada **Mercedes Verónica Sánchez Miguez**.

CONSIDERANDO:

Primero. Competencia

Fundamento legal: Artículos 103, fracción I, y 107, fracciones V, inciso d) y VI Constitucionales, 34 de la Ley de Amparo y 35, fracción I, inciso d) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 115/2022 del entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un **laudo** dictado por una autoridad que radica en la jurisdicción⁴ de este Segundo Circuito.

⁴ Conforme al acuerdo general 3/2013 del extinto Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, punto Tercero fracción II vinculada con el punto Cuarto fracción II, este tribunal es competente para conocer de los juicios de amparo donde ejercen jurisdicción los juzgados de distrito con residencia en Toluca y Naucalpan, a saber:

“**TERCERO** (...)

I. SEGUNDO CIRCUITO: Los tribunales colegiados en materia penal, en materia administrativa, en materia civil y en materia de trabajo, es la establecida para los juzgados de Distrito con sede en Toluca y Naucalpan de Juárez, Estado de México; y en cuanto a los tribunales colegiados con residencia en Nezahualcóyotl, su jurisdicción territorial será igual a la establecida para los juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en la referida ciudad. (...)

CUARTO (...)

II. SEGUNDO CIRCUITO:

Se acredita con el informe justificado y el expediente do por la autoridad responsable.

Es oportuna la promoción del **juicio de amparo**, toda vez que se presentó dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo, como se ve a continuación:

MAYO 2024						
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
			1	2 Notifica y surte efectos (Art. 211, Ley burocrática ⁵)	3 Día 1	4
5	6 Inhábil	7 Día 2	8 Día 3	9 Día 4	10 Día 5	11

Los juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los siguientes municipios: Acolman, Amecameca, Atenco, Atlautla, Axapusco, Ayapango, Cocotitlán, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacán, Ecatzingo, Ixtapaluca, Juchitepec, La Paz, Nezahualcóyotl, Nopaltepec, Otumba, Ozumba, Papalotla, San Martín de las Pirámides, Tecámac, Temamatla, Temascalapa, Tenango del Aire, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Texcoco, Tezoyuca, Tlamanalco y Valle de Chalco Solidaridad.

⁵ Artículo 211. (...) Las notificaciones surtirán sus efectos el día en que se practiquen.

Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010⁵ de la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "**CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN**".

Así como la diversa tesis XVII.1o.C.T.30 K7 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito *—que se comparte—* de rubro *"SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AL EMITIRLAS NO SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A TRANSCRIBIR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA"*.

Séptimo. Antecedentes relevantes

I.- Demanda y contestación

En lo que interesa, del expediente laboral se observa que el **veinticinco de febrero de dos mil diecinueve**,
***** promovió un juicio laboral
en contra del *****
integrándose la litis en cuanto a las prestaciones de la siguiente
manera:

La actora reclamó:	La demandada opuso como defensas y excepciones la
--------------------	---



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

	de:
Indemnización constitucional.	Falta de acción y derecho, en virtud de que es inexistente el despido.
Prima de antigüedad.	Falta de acción y derecho, en virtud de que no está dentro de los supuestos.
20 días de salario base por cada año de servicio.	Falta de acción y derecho, en virtud de que es inexistente el despido.
Aguinaldo.	Falta de acción y derecho, ya que en todo momento se le ha cubierto.
Prima vacacional.	Falta de acción y derecho, ya que en todo momento se le ha cubierto.
Vacaciones.	Falta de acción y derecho, ya que en todo momento se le ha cubierto.
Gratificación del día del servidor público.	Falta de acción y derecho, ya que no se encuentra dentro de los supuestos ya que no es

	sindicalizado.
Tiempo extraordinario.	Falta de acción y derecho, ya que no se encuentra dentro de los supuestos ya que no es sindicalizado.
Prima por permanencia en el servicio.	Falta de acción y derecho, ya que no se encuentra dentro de los supuestos ya que no es sindicalizado.
Gratificación con motivo de la celebración del día del servidor público.	Falta de acción y derecho, ya que no se encuentra dentro de los supuestos ya que no es sindicalizado.
Gratificación de fin de año.	Falta de acción y derecho, ya que no se encuentra dentro de los supuestos ya que no es sindicalizado.
Despensa.	Falta de acción y derecho, ya que no se encuentra dentro de los supuestos ya que no es sindicalizado.



Salarios devengados.	Falta de acción y derecho, ya que no se encuentra dentro de los supuestos ya que no es sindicalizado.
La nulidad de cualquier documento que implique la renuncia de derechos.	Falta de acción y derecho, en virtud de que es inexistente el despido.
La inscripción retroactiva al ISSEMYM.	Falta de acción y derecho, en virtud de que es inexistente el despido.

I.I Hechos

Respecto de los **hechos**, medularmente las partes se pronunciaron de la siguiente manera:

Condiciones laborales:	Actor	Demandado
Inicio de la relación laboral.	01 enero 2013	Controvirtió: 16 enero 2016
Categoría	Auxiliar administrativo.	No controvirtió
Salarios quincenal	\$ 8,497.34	Controvirtió: \$3,147
	De lunes a sábado	Controvirtió: De lunes a

Jornada	de las 09:00 a las 20:00 hrs.	viernes de las 09:00 a las 18:00 hrs. Con una hora para tomar alimentos.
Despido	06 de febrero 2019	Controvirtió: No existió despido, dejó de presentarse al trabajo.

El **veintitrés de abril de dos mil veinticuatro**, la responsable dictó el laudo que ahora se reclama, en el que condenó al Ayuntamiento demandado al pago de la indemnización constitucional, salarios caídos hasta por doce meses, intereses correspondientes, prima de antigüedad, gratificación de salario por cada año de servicios prestados, así como el pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo por el tiempo no prescrito, además de la entrega de constancias de pago de la cuota al ISSEMYM; y, por otra parte, lo absolvió del pago de la indemnización del día del servidor público, prima por tiempo de servicio en el servicio, gratificación con motivo de la jubilación, el día del servidor público, gratificación de fin de año, y el tiempo extraordinario reclamado.

Prestaciones extralegales derivadas del convenio colectivo

La parte quejosa sostiene que el laudo es contrario al principio de legalidad, al no haber analizado correctamente la aplicabilidad del convenio celebrado con el Sindicato Único de

Al resolver, la autoridad responsable determinó que las prestaciones reclamadas con base en el citado convenio — gratificación del día del servidor público, prima por permanencia en el servicio, gratificación con motivo de la celebración del día del servidor público, gratificación de fin de año y dispensa— eran de naturaleza extralegal, por lo que su procedencia dependía no solo de acreditar la existencia del convenio, sino también su aplicabilidad al caso concreto.

Bajo esas consideraciones, al no haberse acreditado la existencia de un sindicato que tuviera la calidad de sindicalizada, concluyó que el artículo 123 bis del Código de Trabajo no le resultaba aplicable y, en consecuencia,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

absolvió al demandado del pago de las prestaciones reclamadas con base en dicho instrumento.

Por otra parte, la autoridad responsable sí condenó al pago de aguinaldo y prima vacacional correspondientes al periodo no prescrito, pero lo hizo en términos de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

Determinación que se estima jurídicamente correcta.

Lo anterior es así, pues deviene infundado el planteamiento de la parte quejosa relativo a que la autoridad responsable omitió analizar correctamente la aplicabilidad del convenio invocado, pues sí expuso las razones jurídicas por las cuales no resultaba aplicable al caso concreto.

En efecto, la autoridad responsable fijó correctamente la carga de la prueba al establecer que, tratándose de prestaciones de naturaleza extralegal, correspondía a la parte actora acreditar no solo la existencia del convenio en que sustenta su pretensión, sino también que se ubicaba en el supuesto de hecho previsto en dicho instrumento para ser beneficiaria de sus cláusulas, esto es, que contaba con la calidad de trabajadora sindicalizada.

Así, la determinación de la responsable se sustentó en que la actora no acreditó formar parte del sindicato, requisito expresamente previsto en el propio convenio como condición para acceder a las prestaciones que en él se contienen, lo cual resulta acorde con el principio de que las prestaciones extralegales deben interpretarse de manera estricta y su procedencia debe quedar plenamente demostrada por quien las reclama.

Máxime que la documental exhibida corresponde al convenio del año 2015, el cual, como lo razonó la autoridad responsable, carece de eficacia para sustentar el reclamo, en tanto que, derivado de la excepción de prescripción declarada procedente, la litis se circunscribió a las prestaciones exigibles en los años 2018 y 2019, por lo que dicho instrumento no se encontraba vinculado con el periodo controvertido.

De ahí que no resulte jurídicamente válido condenar al pago de prestaciones cuyo sustento deriva de un instrumento cuya aplicabilidad no fue demostrada, ya que ello implicaría imponer a la parte demandada obligaciones sin que se hubiese acreditado que la actora se encontraba en el supuesto previsto para acceder a tales beneficios.

Sirve de apoyo a lo anterior, por **analogía**, la jurisprudencia 2a./J. 9/2022, de la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2024328, del tenor siguiente:

“PRESTACIONES EXTRALEGALES. EN EL CASO DE LAS RELACIONES LABORALES QUE SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, CORRESPONDE AL TRABAJADOR APORTAR LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE PERTINENTES PARA DEMOSTRAR LA OBLIGACIÓN DEL PATRÓN PARA PAGARLAS. LO ANTERIOR, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA PARTE

DEMANDADA NO HAYA DADO CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Y TAMPOCO ACUDA A LA AUDIENCIA RESPECTIVA EN SU FASE DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito conocieron de laudos en los que se advierte que las autoridades de Conciliación y Arbitraje, ante la demanda del trabajador de condenar al pago de prestaciones extralegales, llevaron a cabo un análisis de la distribución de las cargas procesales derivado de las omisiones de la parte patronal de dar contestación a la demanda y comparecer a la audiencia respectiva en la fase de ofrecimiento y admisión de pruebas. Así, uno de ellos concluyó que esas omisiones no eximen al actor de la carga probatoria para demostrar sus pretensiones, mientras que el otro consideró que en virtud de que el patrón no controvertió los reclamos del trabajador, sus pretensiones son procedentes.

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que aun cuando el patrón no haya dado contestación a la demanda y no comparezca a la audiencia respectiva, en la fase de ofrecimiento y admisión de pruebas, no debe generarse una presunción que permita concluir que se desvaneció la obligación legal del actor de demostrar que existía la obligación del patrón para pagar las prestaciones extralegales que reclama.

Justificación: Las prestaciones extralegales constituyen beneficios otorgados por los patrones a sus trabajadores adicionales o mayores a los establecidos en la ley, razón por la cual, si bien encuentran respaldo jurídico en ella, el fundamento esencial lo constituye el contrato privado, colectivo o ley, o bien el reglamento interno de trabajo, entre otros. Por ello, en caso de controversia judicial, en términos del artículo [872 de la Ley Federal del Trabajo](#), en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, corresponde al actor, además de expresar los hechos en que funde sus peticiones, aportar las pruebas que considere pertinentes para demostrar sus pretensiones. Consecuentemente, por imperativo legal del artículo [784](#) de la aludida legislación, la circunstancia de que el patrón no haya dado contestación a la demanda y tampoco acuda a la audiencia relativa, en su fase de ofrecimiento y admisión de pruebas, en modo alguno puede concluirse que relevó de la obligación legal y previa que tenía el trabajador de demostrar el deber que tenía la patronal de pagar las aludidas prestaciones. Considerar lo contrario implicaría romper el equilibrio procesal que debe imperar en el procedimiento laboral, ya que la legislación federal en comento establece consecuencias legales vinculadas estrictamente con las omisiones en que, en su momento procesal, incurrió el demandado, en el particular, tener por contestada de manera

afirmativa la demanda y la pérdida del derecho para ofrecer pruebas.”

Asimismo, se comparte el criterio sostenido en la jurisprudencia VI.2o.T. J/4, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, con registro digital 186485, del tenor siguiente:

“PRESTACIONES EXTRALEGALES. CORRESPONDE ACREDITAR SU PROCEDENCIA A QUIEN PRETENDE SU PAGO. *Tratándose de prestaciones que no tienen su fundamento en la ley, sino en la voluntad de las partes de la relación laboral, las mismas deben quedar plenamente demostradas, ya sea que se reclamen como fondo de contingencia, fondo para juguetes o cualquier otra denominación que se les dé; por lo que corresponde al trabajador probar que su contraparte debe otorgarlas, y de no ser así, la determinación de la Junta responsable de condenar a su pago, sin haber determinado previamente la carga probatoria al actor, ni valorar las pruebas relativas a justificar que la patronal estaba obligada a satisfacer los conceptos extralegales reclamados, es contraria a los principios de verdad sabida, buena fe guardada y apreciación de los hechos en conciencia, claridad, precisión y congruencia que rigen a los laudos, previstos en los artículos [841](#) y [842 de la Ley Federal del Trabajo](#); por ende, el fallo impugnado es violatorio de las garantías de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica, consagradas en los artículos [14](#) y [16 constitucionales](#).”*

Por otra parte, tampoco le asiste razón a la quejosa cuando afirma que la autoridad responsable omitió aplicar la jurisprudencia 2a./J. 137/2011, de la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 160481, que dice:

“SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MÉXICO. APLICACIÓN DE LOS CONVENIOS QUE FIJAN LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO. *Los "Convenios de Prestaciones de Ley y Colaterales" que suscriben los Municipios del Estado de México, de común acuerdo con el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México, en los que se fijan las*

condiciones generales de trabajo, resultan aplicables a todos los servidores públicos que presten sus servicios en la institución pública correspondiente, sin exclusión de los de confianza o de los generales por tiempo u obra determinados, porque el artículo 54 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, impone la obligación legal a los Ayuntamientos de fijar las condiciones generales de trabajo para los servidores públicos, sin distinción alguna. En ese sentido, los que tengan el carácter de confianza y los generales por tiempo u obra determinados, podrán verse beneficiados con las condiciones de trabajo previstas en los citados convenios, con las limitaciones que la Ley Burocrática Estatal establece para los de confianza, pues éstos sólo están protegidos por las medidas de protección al salario y de seguridad social. Lo anterior, sin perjuicio de que el Ayuntamiento acredite que ha fijado las condiciones generales de trabajo de los servidores públicos de confianza y de los generales por tiempo u obra determinados, en un reglamento, estatuto, ordenanza o documento distinto a aquél.”

Pues dicha autoridad sí la tomó en consideración; sin embargo, explicó que su contenido no resultaba aplicable al caso concreto. En efecto, la interpretación contenida en dicha jurisprudencia se emitió a partir del texto anterior del artículo 54 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios⁷, en el cual no se establecía de manera expresa una distinción respecto de los sujetos a quienes resultaban aplicables las condiciones generales de trabajo y los convenios celebrados con el sindicato.

No obstante, a partir del texto vigente de dicho precepto⁸, –a partir del 19 de septiembre de 2018, esto es, con

⁷ Texto anterior

ARTICULO 54. Cada institución pública o, en su caso, dependencia, en razón de la naturaleza de sus funciones, fijará las condiciones generales de trabajo aplicables a sus servidores públicos, de común acuerdo, con el sindicato, en caso de existir esta representación, las que tendrán una duración de tres años y podrán ratificarse o modificarse a su término.

⁸ Texto vigente aplicable

ARTÍCULO 54. Cada institución pública o, en su caso, dependencia, en razón de la naturaleza de sus funciones, contará con un Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo aplicables a los servidores públicos sindicalizados y generales. Las instituciones o dependencias públicas que no cuenten con documento que avale las condiciones generales de trabajo aplicables, deberán estar a lo establecido por esta ley, en caso de que el reglamento sea para sindicalizados se hará de común acuerdo con el sindicato, dichos reglamentos tendrán una duración de tres años y podrán ratificarse o modificarse a su término; **los Convenios de sueldos y prestaciones celebrados con el Sindicato se**

En cambio, bajo el marco normativo vigente, la responsable razonó que los convenios de prestaciones son aplicables exclusivamente a los trabajadores sindicalizados, lo cual resulta acorde con el propio texto del convenio y con la normativa aplicable, sin que la parte actora haya acreditado ubicarse en dicho supuesto, de ahí que la inaplicación del criterio invocado se encuentre debidamente justificada.

En consecuencia, al no haberse demostrado la aplicabilidad del convenio invocado, la determinación de absolver al demandado del pago de las prestaciones extralegales

Asimismo, en las condiciones de trabajo queda prohibida toda discriminación por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias políticas, sexuales o estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

reclamadas, así como de condenar únicamente al pago de aguinaldo y prima vacacional en términos de la ley, se estima ajustada a derecho.

Tiempo extraordinario y jornada laboral

La quejosa sostiene que la autoridad responsable incurrió en falta de exhaustividad al analizar el reclamo de tiempo extraordinario, pues afirma que, conforme al convenio aplicable, la jornada laboral para el personal sindicalizado debía ser de lunes a viernes con 7 horas diarias, equivalentes a 35 horas semanales; sin embargo, asegura que en el juicio quedó acreditado que laboraba de 9:00 a 20:00 horas de lunes a sábado.

En ese sentido, argumenta que la responsable debió tomar en cuenta tanto lo dispuesto en el convenio colectivo como los parámetros legales aplicables y, en todo caso, aun sin conceder la aplicabilidad de dicho instrumento, debía atender a lo previsto en el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, en cuanto a la distribución de la carga de la prueba respecto de la jornada ordinaria y extraordinaria, conforme al cual corresponde al patrón acreditarla cuando no exceda de 9 horas semanales y, en su caso, al trabajador cuando se rebase dicho límite, máxime que ofreció prueba de inspección para acreditar sus extremos.

El concepto de violación es **fundado**.

En principio, debe precisarse que, al tratarse de una relación laboral entre un servidor público y un Ayuntamiento del Estado de México, el régimen jurídico aplicable es la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, y no

En ese sentido, el artículo 221, último párrafo, del citado ordenamiento dispone:

$$(\dots)$$

En todos los casos, la carga de la prueba

Del precepto transcrito se advierte que la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios establece un régimen específico de distribución de la carga probatoria en materia laboral burocrática, conforme al cual, tratándose del reclamo de tiempo extraordinario, corresponde al servidor público acreditar las horas adicionales laboradas.

Ahora bien, de la demanda del juicio de origen se advierte que la actora manifestó que laboraba en un horario de 9:00 a 20:00 horas, de lunes a sábado, lo que equivale a un total de 60 horas semanales, y señaló que el tiempo extraordinario se generaba a partir de las 17:01 y hasta las 20:00 horas, durante esos mismos días. Asimismo, en dicho escrito precisó que las horas laboradas debían cuantificarse considerando 48 horas como jornada ordinaria y las 18 restantes como extraordinarias.

Determinación que se estima esencialmente incorrecta.

Sin embargo, no resulta aplicable la regla prevista en el régimen del apartado A del artículo 123 constitucional relativa a la distribución de la carga probatoria respecto de las primeras 9 horas extraordinarias, pues dicha regla no resulta aplicable al régimen burocrático, en el que existe una previsión normativa específica que fue correctamente aplicada por la autoridad responsable.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 17/2013 (10a.), de la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2003178, de contenido siguiente:

JOCELINE HERNANDEZ RODRIGUEZ
3030303130303030373134343636353638
29/03/29 21:41:50

En ese contexto, aun cuando conforme al artículo 221 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios correspondía a la actora acreditar el tiempo extraordinario reclamado, lo cierto es que dicha carga procesal quedó satisfecha mediante la prueba de inspección ocular y la presunción derivada de la falta de exhibición de la documentación requerida, pues precisamente a través de tales medios se acreditó la existencia de una jornada superior a la ordinaria reconocida por las partes.

Al respecto, resulta aplicable el artículo 64 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que establece:

“ARTÍCULO 64. Cuando por circunstancias especiales deban aumentarse las horas de trabajo establecidas, éstas serán consideradas como extraordinarias y no deberán exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas en una semana, con excepción de lo señalado en la fracción I del artículo 57 de esta ley.

Las horas de trabajo extraordinarias se retribuirán con un cien por ciento más del sueldo que corresponda a las ordinarias, cuando no excedan de nueve. Las excedentes de nueve horas, se pagarán al doscientos por ciento más del sueldo que corresponda a las horas normales de su jornada.”

Dicho precepto dispone que cuando por circunstancias especiales deban aumentarse las horas de trabajo establecidas, éstas serán consideradas como extraordinarias y no deberán exceder de 3 horas diarias ni de 3 veces consecutivas en una semana; asimismo, prevé que las horas extraordinarias

1. Deje insubsistente el laudo reclamado.
2. Emita uno nuevo en el que condene a la demandada al pago de 9 horas extraordinarias semanales por el último año de servicios, atendiendo a la excepción de prescripción opuesta por la demandada.

RESOLVE

Notifíquese; vuelvan los autos a su lugar de origen, con testimonio de esta resolución, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron la Magistrada Presidenta **Paola Lizzette Acosta Campos**, el Magistrado **José Antonio Abel Aguilar Sánchez**, y la Magistrada **Mercedes Verónica Sánchez Miguez**, quienes integran el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, siendo ponente el segundo de los nombrados; mismos que en términos de lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley de Amparo en vigor, firman electrónicamente con la Secretaria **Joceline Hernández Rodríguez**, que autoriza y da fe.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

La Secretaria de Tribunal hace constar que esta página forma parte final de la sentencia pronunciada el **ocho de mayo de dos mil veintiséis**, en el juicio de amparo directo **DT. 780/2024**; misma que fue engrosada el **veintiuno de mayo del año en cita. CONSTE.**



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

153977556_4408000035566188004.p7m

Autoridad Certificadora:

AC DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Firmante(s): 4

FIRMANTE							
Nombre:	JOCELINE HERNANDEZ RODRIGUEZ			Validez:	BIEN	Vigente	
FIRMA							
No Serie:	30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.37.31.34.34.36.36.35.36.38				Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	21/05/26 23:23:01 - 21/05/26 17:23:01				Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256						
Cadena de firma:	99 f1 b1 81 f8 9f 8e 92 b1 dd d1 e3 3b 02 5b 4e f3 d1 05 a5 07 78 40 78 6d 4a 9d cf 09 e4 0f 51 8e 17 97 55 e8 1c 38 0f 0b 72 6e 8e d3 5d d3 17 5c 7c 6a 38 5b 75 2f f9 78 9a bc b6 f2 8f 0a 52 21 e6 b8 32 a6 80 9a 0e d9 91 e3 d3 91 9a d9 34 07 c9 15 53 f8 43 f1 38 20 87 49 43 82 5c 80 b9 d4 2b f7 b3 a5 db b3 6c 88 83 94 08 dc 70 e8 60 be 7f 1e 46 d4 e9 f7 b6 1a c3 84 be 4d d7 05 d5 09 c7 ed b0 c6 73 4f 9e 0f da e9 9d 14 b4 68 d0 78 f5 3e 35 6c 2f de 0e bd 3f 4f 12 ed 6d 38 da dc fd 88 b9 ad bf 40 65 01 88 5b 1b 56 f0 92 17 67 e2 3b 5f 77 7b 16 53 c2 b3 e1 7e a2 08 96 95 47 b7 8a a3 cc c3 b8 d4 ce fe 6e 50 9b d7 15 82 22 f7 c9 7b a3 21 64 7f b6 30 34 99 ff 31 21 a9 34 ff a2 ad b1 e5 bf 37 99 82 e8 c7 4e 51 e3 53 8e 48 90 25 7a 70 90 c3 2d 44 0e 40 28 4e 21 ae						
OCSP							
Fecha: (UTC/ CDMX)	21/05/26 23:23:01 - 21/05/26 17:23:01						
Nombre del respondedor:	OCSP SAT						
Emisor del respondedor:	AC DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
Número de serie:	30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.37.31.34.34.36.36.35.36.38						
TSP							
Fecha : (UTC/ CDMX)	21/05/26 23:23:01 - 21/05/26 17:23:01						
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal						
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal						
Identificador de la respuesta TSP:	156865245						
Datos estampillados:	f8qa1DE4ZhusHTkcuf8NGo0/4hw=						



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	JOSE ANTONIO ABEL AGUILAR SANCHEZ	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.02.d1	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	21/05/26 23:28:19 - 21/05/26 17:28:19	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	52 03 35 e2 b2 d2 25 5a 89 11 b6 4f d2 50 8f de 8e 0e aa 4d dd d1 60 f0 6f 91 f7 32 74 d6 16 4d 63 32 36 0d 3d 27 b8 60 9b 30 0c 4b fb 0f 97 c9 c3 83 d0 78 bd 94 c4 d2 a8 00 41 8c 1c 34 ec be 81 96 f4 9f 31 cf 94 0f 21 e0 af 70 05 45 cd b6 af d4 08 a9 9b b0 dd f6 0a 12 14 db ab 84 1f 85 30 ec dd 8e ed 1d cc 1c 14 71 83 a3 c9 93 df 8c f7 ac 0e 62 5f 45 ac ec c6 35 fc 4c c2 bf 50 48 56 11 5d c0 4d 64 b9 3d 10 87 f7 f4 b3 b8 24 30 c5 a5 d2 42 a0 6d da bb 88 b6 c8 56 69 ef 70 00 94 a0 25 8c 36 b7 fe 6d 7e 28 00 9d 38 84 64 9e 17 db 9b 58 7f 52 95 4a 54 54 7a cf 81 bf e0 8b ef 98 6e 9d 43 66 aa c8 e3 4b f2 7e f8 c6 e9 c9 3f 9d 57 be 6d 95 e1 20 f5 94 42 fa 49 30 40 fc 35 a4 13 e1 25 3d 6d a5 c1 5b 9a b6 3c 6c 65 41 a3 20 df ec b8 00 e1 be c0 3a 86 30 a2 10 b3 35 74 30 22 e8 bb cf e8 31 4c d9 90 fa 04 ee ab 20 dd 46 b1 bf 15 c8 90 c0 0b 77 46 1f d5 b6 61 37 41 70 62 9d e2 51 02 58 f9 2e a9 14 88 9f 6b 6e 54 af 2d d9 54 e1 ec 29 a2 e0 55 ff 7c 87 f7 79 4f 61 dd 44 13 95 02 cb b7 c3 c4 d4 63 8f 74 53 ff 5a fb a1 9e 35 50 55 79 98 f9 34 e1 28 fb 21 a6 01 52 7d d6 17 60 e8 c7 00 49 f4 d3 c8 ed 0c c3 9e 8f 23 14 c6 17 4c a2 b1 05 5b 36 99 ba 5d			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	21/05/26 23:28:19 - 21/05/26 17:28:19			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.02.d1			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	21/05/26 23:28:19 - 21/05/26 17:28:19			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	156869530			
Datos estampillados:	1Y/AzXTnYFxbjWfZa8x3CsmyKQs=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	PAOLA LIZZETTE ACOSTA CAMPOS		Validez:	BIEN Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.98.15		Revocación:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	21/05/26 23:32:53 - 21/05/26 17:32:53		Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	8d 7a b4 cd 8c 50 e7 27 b2 f8 f9 f2 24 e7 81 c9 c0 5e 2a a1 a1 ef 33 03 37 70 a6 b1 32 36 16 4c f2 50 d7 10 a9 46 c7 6d ec 7d 92 ba ba 55 82 ec 2a 09 b8 02 9c 55 1f 10 d8 92 9d 4d 6f 62 49 c8 17 57 d6 a3 06 0f 05 1d 00 45 aa de 2d a8 e2 fc 84 d6 46 1d 1e 10 10 24 4a 92 51 6f 93 21 40 af d2 d1 4a 2b 7c 73 ff 27 9b 95 a2 17 07 59 4f 72 98 c0 0a c3 8c 98 24 5d d5 99 b4 ba 6f 2c 41 66 95 5d bc a0 d6 a6 70 fd f9 d5 3e cd 8f ca fb a0 3d 3a 3b 66 27 a1 7d a8 2c ab 04 66 f3 7e d3 47 b5 ed 89 8d 89 93 35 34 f1 8f 6a b7 bf 21 41 50 4a f9 d5 b0 8b 92 4f 0c b0 f4 a5 23 c2 86 10 ae 50 1a 95 de 70 dd 7e e6 46 2c 35 ac 9a 6d eb e1 ef f1 be 05 db 70 97 ae 12 d6 c6 36 28 b4 33 7b 9d 6d 8f 63 00 e0 7a ba 20 88 ce ea 21 0a 5d 12 e0 ed d2 c9 21 bb 1f 57 d8 2a 55 d8 15 1c 31 fa fa 1e d3 9a 7c c7 33 f3 42 f3 67 06 f9 11 46 13 52 55 1e 37 77 81 aa d6 18 02 4f 0e a6 f4 bf 2a ab df 13 54 e4 05 c6 81 d4 37 fb 74 16 ba 02 34 ca c6 c3 48 97 c4 07 de 29 dc 4e 9f 8d 3c 91 da 0a dd ef 6c 4e 5e 35 8f 1b 43 28 f2 50 bc 1d 2f 5d 1d 6d aa 63 36 75 c8 c4 df 70 00 f9 d0 68 77 f0 94 0f c2 88 ca d3 6d b8 61 4d 37 ad 67 5a ea c5 4b f0 1b 05 68 f9 0e 1e f5 4e 54 7a 60 09 93			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	21/05/26 23:32:53 - 21/05/26 17:32:53			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.98.15			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	21/05/26 23:32:53 - 21/05/26 17:32:53			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	156872631			
Datos estampillados:	VBjmiLNYxt0UZ9Rtk4Oal/h9eig=			



FIRMANTE				
Nombre:	MERCEDES VERONICA SANCHEZ MIGUEZ	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.3a.c8	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	21/05/26 23:37:25 - 21/05/26 17:37:25	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	5d 8c 00 22 0b cd e2 3f 02 09 b7 2a a5 39 3f cb 78 50 b5 ed a0 6a c4 74 b3 b9 4a 93 85 3a 53 58 f8 43 05 55 a1 e8 65 ea 06 d1 25 81 2b 34 ee b8 52 29 62 92 86 85 74 b2 52 41 6c 4b cf c9 57 08 39 9b 12 54 c8 1c 25 6a d8 d8 7 9c 3b 9b 46 5d 68 e6 89 f0 81 ba 54 27 5e 0c 3d 68 9e ba 12 3f 06 08 0d 88 20 a9 57 e0 3c 6e 90 1b 11 d5 03 dc 2b 8b f1 ff d2 af 39 a2 65 d0 e2 63 b6 f2 4b f2 4c 05 af a6 33 07 e6 59 a3 e9 c5 5d ed 96 ba 86 ae 9a 23 5a 66 1b 45 06 ae 03 c1 88 28 f0 8e 4e f7 c1 c4 a2 28 e6 79 7d ce 2d 5f af 48 d6 13 43 d7 cb 51 89 ce 30 73 b9 74 70 9d 6f 7b 61 aa 96 1f e5 2a 76 30 cf cb b4 b1 74 ea da a6 8d 13 de da b0 3a 6c aa ed 8e cf f5 c8 70 67 10 e8 52 eb 6a 37 91 6c ea 84 83 e8 50 24 60 0b 2a 73 fb c3 82 0c f7 27 97 b3 0a 78 5d d8 c5 1e bc 2a b6 43 e9 22 47 7e fa 77 86 4d 03 5b 7b 8e 46 32 9f 4f 7f 15 b5 1b d2 03 d4 35 b4 1d e4 85 50 af 03 45 cd fc d2 b7 62 d1 c2 d7 54 9b 45 f4 b2 43 e8 07 50 c5 40 33 51 86 d2 36 4a a5 9c 33 8c 95 85 9c d4 b1 ac e9 6d 93 f4 6a 60 51 2f a2 84 f4 71 b3 e5 4a fd 73 63 29 7a 73 65 3a 51 5e a0 11 59 08 41 40 a3 b7 02 d7 39 67 bf e0 c2 3f fe d2 dd ca d8 17 59 c0 ca 0e d0 a0 e2 61 70 89 72 c7 e8 6b			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	21/05/26 23:37:26 - 21/05/26 17:37:26			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.3a.c8			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	21/05/26 23:37:27 - 21/05/26 17:37:27			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	156876054			
Datos estampillados:	pdVORVAWBikblOwAsF2xES2ZzKI=			

El veintiuno de mayo de dos mil veintiseis, la licenciada Joceline Hernández Rodríguez, Secretario(a), con adscripción en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, hago constar y certifico que en esta versión pública no existe información clasificada como confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Conste.